

**BOLETIN ECLESIASTICO**


DE LOS OBISPADOS DE

SALAMANCA Y CIUDAD-RODRIGO.**CIRCULAR**

permitiendo trabajar en los dias festivos durante la próxima recoleccion.

Damos el competente permiso para que los fieles dedicados á la recoleccion durante la próxima temporada en que aquella ha de verificarse, puedan trabajar en los dias festivos, si así la necesidad (á juicio del Párroco) lo exigiere, esceptuados los de S. Juan de Sahagun en este Obispado, y los de S. Pedro, Santiago y Asuncion de Nuestra Señora en ambas Diócesis, sin que por ello queden dispensados de la obligacion de oír misa en los domingos y dias de precepto. Los Sres. Curas y demás encargados de Parroquias al dar conocimiento de esta nuestra circular á sus amados feligreses les exhortarán para que en los dias festivos en los cuales trabajaren, procuren, á mas de oír Misa, practicar algunos actos de piedad á fin de santificarlos en lo posible.

Salamanca 5 de Junio de 1874.—*El Obispo de Salamanca y Administrador Apostólico de Ciudad-Rodrigo*.—D. S. B.



JURISDICCIONES SUPRIMIDAS DE LAS ORDENES MILITARES.

Notable comunicacion del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valladolid al Excmo. Sr. Presidente del Poder Ejecutivo de la República ()*

«Arzobispado de Valladolid.—Excmo. Sr.:—Con harto sentimiento mio me veo precisado á ocupar por un breve rato la ilustrada atencion de V. E. Más el decreto de 14 del corriente, que dispone el restablecimiento del tribunal de las Órdenes Militares en oposicion á lo preceptuado en la Bula *Quo gravius*, que abolió y estinguió la jurisdiccion eclesiástica que aquel ejercía anteriormente, é incorporó los territorios de dichas Órdenes á las diócesis respectivas, me obliga como ejecutor que he sido de la espresada Bula y como Obispo español, á acudir á V. E. con el laudable objeto de ver si evito que un cisma religioso venga á agravar las inmensas desventuras de la pátria.

Guiado por tan buen deseo, pido respetuosamente al Poder Ejecutivo se digne revocar dicho decreto, y me fundo para pedirlo en que sus disposiciones atacan uno de los dogmas fundamentales del catolicismo, cual es, el de la obediencia en materias religiosas al Romano Pontífice. V. E. se persuadirá de que desgraciadamente es exacto lo que afirmo, si se sirve oir los razones que voy á someter á su consideracion, ofreciéndole que procnraré exponerlas con la claridad y concision posibles.

Séame licito antes lamentar que en el preámbulo del mencionado decreto no se hayan guardado todos los miramientos y respetuosas atenciones de que los Gobiernos, aun muchos que no son católicos, nunca prescinden cuando tratan de la

(*) Véase el número anterior de este Boletín y el 20 del año próximo pasado.

Santa Sede. Suponer que por parte de la autoridad pontificia no ha habido la detencion necesaria, que ha procedido sin enterarse bien del asunto y de paso darle, siquiera sea de una manera indirecta, lecciones de derecho público eclesiástico, no me parece muy digno ni propio de documentos de esta clase, los cuales deben ser modelo de cortesía, principalmente cuando hay que ocuparse en ellos de la augusta personalidad del Papa ó de la divina autoridad que ejercee.

Pero lo mas original es que se le dirija ese cargo á renglon seguido de decir que el decreto de 9 de marzo de 1873, que dictó uno de los gobiernos anteriores, «fué inspirado quizás por las preocupaciones del momento, y mirando á las Órdenes Militares institutos privilegiados, extraños á la época y al parecer incompatibles con la nueva organizacion política en lo que tienen de nobiliarias, proclamó su extincion sin considerar que no obstante las salvedades más ó menos explicitas en pró de la jurisdiccion y de cuantos derechos correspondian á la Nacion y al Estado, sería difícil cohonestar la existencia de aquella y el mantenimiento de estos por falta de materia propia y de representacion externa.»

Confesándose todo esto en el préambulo despues de haberse afirmado que en virtud del decreto ley de 2 de Noviembre de 1868 «fué arrancada la jurisdiccion de los jueces propios que Caballeros de las distintas Órdenes ejercian conforme á las leyes, Bulas, prácticas y costumbres,» y que imposibilitado el alto tribunal civil que sustituyó á dichos jueces para ejercerla por los diferentes motivos que allí se expresan y otros más graves que se callan, «se habia llegado al extremo doloroso, pero inevitable de una verdadera denegacion de justicia, yaciendo entre el polvo y relegados al olvido gran copia de asuntos de indole benefical y sacramental, de fuero eclesiástico y de fuero mixto,» lo racional y lo lógico hubiera sido que



en vez de atribuir ligereza á la autoridad pontificia y de poner en duda el acierto con que juzgaba en peligro ó abandonados intereses religiosos, se confesase y afirmase con ingenuidad que las disposiciones de la Bula *Quo gravius* eran absolutamente necesarias á consecuencia de la extincion de las Órdenes Militares acordada en el decreto de 9 de Marzo. Fuese ó no inspirado este por las preocupaciones del momento, lo cierto es que se expidió; y si es una verdad tambien que extinguidas aquellas, *era difícil cohonestar la existencia de la jurisdiccion que disfrutaban por falta de materia propia y de representacion externa*, y si aun antes de dicho decreto, ya no podia funcionar ni canónica ni legalmente el tribunal con que se habia pretendido reemplazar al especial de las Órdenes y ni siquiera existia el Gran Maestre á quien se pudiera acudir para el nombramiento de ministros que compusieran otro con los requisitos y condiciones prevenidos en las Bulas y privilegios apostólicos, ¿por qué se extraña y se censura entonces que la Santa Sede haya abolido y extinguido esa jurisdiccion y mandado que revierta á los Obispos para que la ejerzan como la ejercian antes de que la hubiera concedido á los grandes Maestres de las expresadas Ordenes?

No: Su Santidad no ha procedido de ligero, sino con el mayor detenimiento y con suma sabiduría, como procede siempre. Creyó que el Gobierno que habia dictado el decreto de 9 de Marzo era un Gobierno reflexivo y sério, y no pudo imaginar que á los pocos meses habia de venir otro Gobierno que desbaratase la obra de su antecesor y que por añadidura dirigiese á la autoridad pontificia tan injusto cargo. En el órden político, aunque con descrédito y daño de la Nacion, podrá pasar que hoy se deshaga lo que se hizo ayer, mas en el órden religioso no; y por eso es, que la Bula *Quo gravius*, mucho mas estando ejecutada ya, se encuentre en todo su vigor lo mismo antes



que despues del decreto de 14 de Abril, que por razon de la causa y fin, de la forma y fondo de sus disposiciones, perjudica á las distinguidas Órdenes Militares, mucho más que el que ordenó la extincion de tan ilustres instituciones, y al propio tiempo es una prueba evidente de la conveniencia y necesidad de que expidiese la referida Bula.

En vano en el preámbulo del decreto que estoy examinando se acude al principio de la soberanía civil y á las modernas teorías que sobre la misma ha admitido y proclamado la revolucion, para deducir consecuencias que en manera alguna pueden aceptarse, porque pugnan con otros principios inconcusos de que no es lícito prescindir y de los que se deducen muy distintas y contrarias conclusiones. Con arreglo á estos últimos, debe forzosamente reconocerse que la Potestad civil no es la única soberana, sino que lo es igualmente la Potestad espiritual, y que por virtud de esta cualidad peculiar á las dos, puede cada cual funcionar en su respectiva esfera de accion libremente y con mútua independenciam, porque si independiente es la una, la otra lo es tambien.

Supuesta esta verdad, no sé á que conduce decir *que el principio de la jurisdiccion, que la competencia á favor del poder que sea el símbolo de la soberanía civil y que la necesidad de impedir toda ingerencia que tienda á limitar aquel, son puntos esenciales cuyo desconocimiento ó negacion envuelven el menosprecio hácia los derechos superiores de la nacion y la intrusion más funesta y peligrosa á la independenciam de la autoridat del Estado.*

No puedo ni quiero persuadirme de que en este párrafo se haya pretendido aludir al Papa ó á mí como delegado suyo en el concepto de ejecutor de la Bula *Quo gravius*, ni que con tal propósito se diga, al final del mismo preámbulo, que el Gobierno obrando de la manera que allí se indica, *mantiene en*

toda integridad los derechos de la soberanía, que no pueden renunciarse sin caer en vergonzosa abdicacion y pone justo límite á cualquier ingerencia que, so pretexto de velar por los intereses religiosos, tienda á cercenar aquella ó lastimarla. Pero si, lo que no es creible, se hubiera escrito todo esto con motivo de haber expedido Su Santidad dicha Bula y haberla yo ejecutado, y si al redactar ambos párrafos presidió el mismo pensamiento que al dictar la órden comunicada por el Señor Ministro de Gracia y Justicia á algunos Obispos, en la que además de encargarles suspendan la ejecucion de mis autos, se habla tambien de intrusiones, dichos párrafos entrarían entonces un error condenado en la Constitucion dogmática *Pastor æternus* del Sacrosanto Concilio del Vaticano.

El Papa, quando en materias religiosas dicta alguna disposicion que considera conveniente ó necesaria para el bien espiritual de los fieles, no se intrusa ni se ingiere en cosas que no le conciernen. Él, segun enseña esa Constitucion dogmática, tiene plena y suprema jurisdiccion en toda la Iglesia, no solo en las cosas que tocan á la fé y á las costumbres, sino en las que pertenecen á la disciplina y al régimen de la Iglesia esparcida por todo el mundo: y así al expedir la Bula *Quo gravius*, lejos de intrusarse é ingerirse en lo que no era de su incumbencia, y lejos tambien de limitar el poder que sea el simbolo de la soberanía, de menospreciar los derechos superiores de la nacion y poner en peligro la independenciam de la autoridad del Estado, no hizo otra cosa sino ejercitar esa suprema potestad que Dios le ha dado en toda la Iglesia.

Siendo esto innegable, no ha habido esa intrusion ni esa ingerencia por parte del Papa. La hay, atendida la materia del decreto de 14 de Abril, por parte de la potestad civil, que ha restablecido un tribunal cuya jurisdiccion eclesiástica habia sido suprimida por la Bula *Quo gravius*, resolviendo de este

modo por sí y en sentido opuesto á lo que canónicamente estaba resuelto y sin meditar tampoco las consecuencias, un asunto espiritual y de índole puramente religiosa, y como tal de la exclusiva competencia de la Santa Sede.

Para afirmar lo contrario, es preciso suponer, como equivocadamente se supone en el preámbulo, que los derechos abolidos por la citada Bula constituyen una parte integrante de la soberanía civil y son inherentes á la misma, suposición que rechazan de consuno la ciencia y la religión. Basta conocer el origen que en el referido preámbulo se atribuye con acierto á esos derechos, para determinar su verdadera naturaleza, y sostener que no son ni más ni menos que gracias y privilegios apostólicos, y como tales sujetos al conocido principio legal *ejus est tollere, cujus est condere*; el que dá los privilegios, lo mismo que el que dá las leyes, puede derogarlos. Derechos que reconocen ese origen y tienen esa naturaleza, ¿pueden ser reputados como derechos *magestáticos*? Creo que no habrá ningún publicista digno de este nombre que se atreva á asegurarlo.

No faltan algunos, sobre todo entre los Protestantes, que atribuyen á la soberanía civil derechos y facultades en lo religioso, que por la divina constitución de la Iglesia no pueden tener sino en virtud de concesiones de esta; pero no ha habido ninguno, que yo recuerde, que eleve los derechos adquiridos por este medio á la categoría de aquellos que forman parte integrante de la soberanía civil y los repite como inherentes á la misma, y en tales términos, que no puedan renunciarse sin caer en *vergonzosa abdicación*; porque esto equivaldría á reconocer á la autoridad pontificia como fuente de la soberanía civil, ó de la que al menos nacen ó se derivan algunas de sus integrantes atribuciones.

Ni en este último error del más exagerado y hasta hoy des-

conocido ultramontanismo que se advierte en el preámbulo, ni en el anterior de los Protestantes, incurrió el Emperador Carlos V. Concedor profundo de los fueros y derechos que le correspondían como Soberano, no tuvo la arrogante presunción de creer que se hallaban comprendidos entre esos derechos de la *magestad* los espirituales que sobre las cosas y personas religiosas de las Órdenes Militares disfrutaban sus Maestros por indultos apostólicos. Así es, que para conseguirlos, acudió al Papa en solicitud de que uniera á perpetuidad esos Maestrazgos á la Corona de España; y como su intencion no era tampoco convertir con el trascurso del tiempo los derechos espirituales adquiridos por una graciosa concesion de la Santa Sede en derechos *integrantes é inherentes* de la referida Corona, aceptó con gusto y lleno de reconocimiento la Bula *Dum intra*, en los términos en que se encuentra redactada y que es preciso no haber leído sino en el cortísimo é incompleto extracto que de ella se hace en una de las notas de la Novísima Recopilacion, para querer dar el carácter de irrevocable, de imprescriptible y de irrenunciable á ese insigne documento pontificio, y de esta suerte sacar partido de él en contra de la Bula *Quo gravius*.

Con la union á la Corona de los Maestrazgos logró Carlos V, no precisamente *consolidar su soberanía*, como se indica en el preámbulo, que merced á los esfuerzos de los Reyes Católicos y á la sabiduría y entereza del eminente hombre de Estado el Cardenal Jimenez de Cisneros, la tenia tan asegurada, que no necesitaba del apoyo que podian darle algunas facultades espirituales por apreciables é interesantes que fuesen, sino afianzar la paz y tranquilidad del reino, y evitar en ocasiones dadas sublevaciones y disturbios, algunos de los que presenció el mismo Adriano VI antes de ocupar la silla de San Pedro, como lo indica en la Bula *Dum intra*. Y es de notar, que aunque

por efecto de su benignidad para con el soberano que habia sido su discípulo, se las otorgó generosamente, lo hizo sin embargo con importantísimas salvedades, cortapisas y condiciones. No parece más si no que este venerable Pontífice previó el caso de que habia de llegar un dia en que se pretendiera hacer estensivos aquellas gracias y privilegios á los que no habian sucedido al Emperador en el trono católico y hasta que se quisieran invocar en contra de la autoridad pontificia.

Léase íntegra esa Bula y se verá la exactitud de la anterior observacion. Despues de enumerarse en ella los grandes servicios prestados á la religion por los Caballeros de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, así como por el Emperador Carlos V. tanto contra los turcos como contra Martin Lutero y sus secuaces, refiere con elogio los hechos gloriosos de igual naturaleza ejecutados por los Reyes católicos y otros progenitores suyos, y expresa además que el fin de las mencionadas Órdenes Militares habia sido el procurar la exaltacion de la santa fé, la destruccion de los bárbaros infieles y la guerra contra los mismos. Y manifestando en seguida lo conveniente que sería para la paz y quietud del reino, no ménos que para la guerra contra infieles, dar al Emperador en perpetuidad la administracion de dichas Órdenes que por concesion de la Santa Sede ya habian desempeñado otros Reyes anteriores, une é incorpora perpétuamente á la Corona Real los Maestrazgos de las referidas Órdenes Militares, concediendo á dicho Emperador y á los Reyes católicos sus sucesores, ya sean varones ó hembras, todas las preeminencias, jnrisdicciones, facultades y derechos propios de los indicados Maestrazgos, y disponiendo que el derecho de administrarlos pase con la corona al varón ó hembra que la posea, y tenga facultad de hacer y ejercitar todas las cosas y derechos que los Maestres solian hacer y ejercitar en sus tiempos; con la prevencion

de que el mismo Rey católico, Emperador electo y sus sucesores los Reyes de Castilla y de Leon, deben y están obligados á hacer que se ejerza bien y laudablemente todo lo que concierne á las cosas espirituales por medio de personas religiosas de las referidas Órdenes nombradas por los mismos Reyes que entonces fuesen, amovibles *ad nutum* de los mismos. Mas con el objeto de que nada se hiciese en perjuicio de esta union ó incorporacion por los Caballeros y Freires de las Órdenes mencionadas en virtud de eleccion, de postulacion ó de otro medio se les priva en la vacante del Trono, *decendete rege vel regina, qui dictos Ordines administraverit*, de todo derecho y potestad de elegir, hacer postulacion ó provision de nuevo administrador perpétuo, y bajo las mas severas penas canónicas, cuya absolucion se reserva de un modo especial al Romano Pontífice, se prohíbe á todos y á cada uno usar de esa facultad de que se les ha privado. Y haciendo, por último, otras declaraciones y prevenciones que no afectan á la cuestion del dia, termina su parte dispositiva con las palabras textuales siguientes: «Y cualquiera de ellos (los Reyes), que en algun tiempo se apartare, lo que Dios no permita, de nuestra obediencia y devocion y de la del Romano Pontífice que entonces fuere canónicamente tal, y de la de la Iglesia Romana, ó hiciere guerra contra él, ó en su daño y en detrimento de su honor é intereses maquinase directa ó indirectamente por sí ó por medio de otros, quede privado de esta gracia, y sean las presentes letras de ninguna fuerza y valor, y disuelta por lo tanto la misma union, y entiéndase que vacan por esta disolucion los mismos Maestrazgos, y de ellos puede disponer libremente la Santa Sede.»

He procurado hacer un extracto corto, pero fiel de dicha Bula y he copiado literalmente la cláusula final para poder deducir de su letra y de su espíritu las siguientes incontrovertibles conclusiones. *Primera*: que las gracias y privilegios á que

aquella se refiere fueron concedidos personalmente y en términos precisos y concretos al Emperador Carlos V y á los Reyes católicos de Castilla y de León, sus sucesores, y no en general á la nacion, ni á la soberanía civil, ni á cualquiera que en lo sucesivo y por las vicisitudes de los tiempos pudiera ejercer la autoridad suprema del Estado. *Segunda:* que por consecuencia es de todo punto improcedente para la resolución de este asunto cuanto en el preámbulo mencionado se dice repetidas veces acerca de *los elementos y funciones de la soberanía*, de los titulados *dogmas de la soberanía*, *del símbolo de la soberanía*, *de los derechos de la soberanía* y de que la soberanía civil es *fuelle de toda jurisdicción*, como si se quisiera [dar á entender, porque en otro caso no habia para qué decirlo, que lo es tambien de la eclesiástica. *Tercera:* que concedidos esos privilegios solo á los Reyes católicos como aparece terminantemente de la susodicha Bula, no puede en manera alguna hacerse extensivos á ninguna colectividad, ni á ninguna otra persona, por elevada, distinguida y caracterizada que sea, que no haya sido objeto expreso de los referidos privilegios, porque es un principio de jurisprudencia universal reconocido por el Tribunal Supremo de Justicia, que en lo relativo á privilegios, las leyes deben interpretarse estrictamente y no ampliarse á casos que no se hallan en ellas clara y terminantemente consignados; y como este principio está fundado en la equidad y en la justicia, es aplicable á toda clase de privilegios. *Cuarta:* que por consiguiente, con arreglo á las disposiciones de la misma Bula, solo los Reyes católicos de España pueden lícita y válidamente nombrar personas religiosas de dichas Órdenes para el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica. *Quinta:* que no teniendo los Caballeros y Freires de las indicadas Órdenes facultad alguna para proveer de nuevo administrador, esto es, de Gran Maestre, en las vacantes naturales del Trono, no la tienen

tampoco derrocado este por medio de una revolucion, porque con él desapareció tambien el Maestrazgo que le estaba unido á perpetuidad y que no puede reaparecer en otra forma, al ménos por lo que se refiere á sus facultades espirituales, sin nueva concesion apostólica. *Sexta:* que mucho ménos pueden tener esa facultad los demás que no perteneciendo á las Órdenes carecen de todo título para creerse con el derecho que á las Ordenes Militares y no á los Poderes Públicos les correspondia antes de la union é incorporacion de los Maestrazgos á la Corona católica de España. *Sétima:* que todavía es mas insostenible que los mismos que hicieron esa revolucion y los Poderes que de ella han nacido, hayan llegado á ser los sucesores de los Reyes católicos en el Maestrazgo y en la suprema Gefatura de las Órdenes Militares sin eleccion, ni nombramiento de nadie, y sin la aprobacion y confirmacion de la Santa Sede, que por derecho se requiere para el legítimo ejercicio de la jurisdiccion eclesiástica, toda vez, que como se deja probado, no les alcanzan los privilegios concedidos en la Bula *Dum intra*. *Octava:* que aun en la hipótesis de que realmente fuesen ó pudiesen ser tenidos por sucesores de los Reyes católicos en el Maestrazgo, los hubieran perdido con arreglo á la cláusula final de la citada Bula.

Para probar esta última conclusion, empezaré por decir que aun admitiendo que esos Poderes sean sucesores legítimos de los Reyes católicos en el Maestrazgo, y como tales deban disfrutar en el órden religioso de las prerogativas y privilegios que aquellos disfrutaban, es indudable que estas prerogativas y estos privilegios no tendrían hoy más extension que en la época de la monarquía, ni más duracion que la que determina la Bula *Dum intra*. Y si caducarian inevitablemente en cualquier tiempo en que el Rey se apartare de la devocion y obediencia del Romano Pontífice y de la de la Iglesia Romana, como terminantemente se

previene en esta Bula, hubieran caducado tambien sin ningun género de duda en el caso de que el Rey hubiese destruido la unidad católica en España, felicitado al usurpador de los Estados del Papa y de la misma Roma, elevado el concubinato á la categoría de matrimonio, y vilipendiado el matrimonio cristiano hasta el punto de no reputarlo legalmente por tal matrimonio y considerar ilegítimos á los hijos nacidos en él. Si ese Rey además hubiese expulsado las Órdenes religiosas, echado abajo sin necesidad alguno de los conventos de Comendadoras de las Órdenes Militares, privado á la Iglesia de la dotacion que de rigurosa justicia se le debia como indemnizacion de sus cuantiosísimos bienes de que se apoderó el Estado, quedando de sus resultas abandonado el culto y reducido el clero y las infelices monjas á la más espantosa miseria; si hubiera hecho pedazos el Concordato celebrado con la Santa Sede y sido causa de un cisma tan escandaloso y funesto como el de Cuba, donde se considera como Arzobispo á un clérigo excomulgado *nominatim* por el Papa y se tiene en un calabozo y se persigue como á criminales al dignísimo Vicario Capitular Prelado legítimo de dicha diócesis, y á su fiel y virtuoso Secretario; si ese Rey hubiera elegido un Ministro, sabiendo que en pleno parlamento se atrevió á decir que tenía declarada la guerra á Dios y le hubiese permitido proveer Obispados; si, por último, hubiera recogido las Bulas á unos Obispos preconizados por el Papa, previo acuerdo con él; si hubiera menospreciado un mandato de Su Santidad consignado solemnemente en una Bula, dando orden á los presidentes de las Audiencias, á los fiscales y á los Gobernadores civiles para que prestasen el auxilio moral y material de su autoridad, cuando para ello fuesen requeridos por los Vicarios y Priors de las Órdenes Militares que quisieran rebelarse contra aquel mandato, y si hubiese restablecido el tribunal de dichas Órdenes á pesar de ha-

llarse abolida su jurisdicción eclesiástica por la Santa Sede, ¿no es verdad que ese Rey habría perdido necesariamente todos los derechos, prerogativas y privilegios que alcanzó en virtud de la Bula *Dum intra*? Constituido por esa larga serie de hechos, que tanto daño hubieran causado al Catolicismo, en manifiesta oposición, por no decir en abierta hostilidad, contra la Iglesia, ¿como había de seguir gozando de esas prerogativas y privilegios que esta sola concede á sus bienhechores y de los que por sus santas leyes les priva como no podía ménos desde que dejan de serlo para convertirse en lo contrario? Con arreglo á estas leyes y á lo dispuesto por dicha Bula en la cláusula final antes citada, cualquier Rey, aunque fuese un Carlos V ó un Felipe II, que hubiera ejecutado algunos de los actos que acaban de referirse, hubiera perdido de seguro esos privilegios y prerogativas, y podrían conservarlos los Poderes que se han ido sucediendo desde la revolución de Setiembre de 1868 acá, habiéndolos ejecutado todos?

Con el mayor sentimiento me veo precisado á valerme de esta clase de reflexiones, cuando al presente nada está más distante de mi ánimo que el recriminar á ninguno de esos Poderes. Mi objeto al hacerlas es otro muy distinto. Solo me propongo en cumplimiento de sagradas obligaciones demostrar la improcedencia y la injusticia del decreto de 14 de Abril é impugnar las ideas equivocadas y gravísimos errores de su preámbulo. En él hasta se llega á afirmar que de resultas de los privilegios concedidos por los Romanos Pontífices á los Maestros de las Órdenes Militares, que en el orden eclesiástico no eran otra cosa que unos simples religiosos legos, superiores de sus respectivos Institutos pertenecientes á las Órdenes de San Agustín y del Cister, *se caminaba pausada, pero firmemente, salva la suprema unidad de la Iglesia universal, al restablecimiento de la Iglesia nacional con elementos propios y característicos.*

Por mas esfuerzos que he hecho para comprender lo que se ha pretendido decir en esta cláusula, confieso ingénuamente que no me ha sido posible lograrlo. ¡Unidad suprema! ¡Iglesia nacional! ¡restablecimiento de esta! ¡elementos propios y característicos!, he aquí otras tantas ideas nuevas que no habrá español alguno instruido en la ciencia canónica y medianamente enterado de la historia eclesiástica de España que pueda concebir ni explicar. ¿Dónde se ha visto que la unidad de la Iglesia católica admita la distincion de grados que supone el adjetivo *suprema*? ¿En qué época existió y cuándo fué extinguida esa llamada *Iglesia nacional* á cuyo *restablecimiento*, se asegura con el mayor aplomo, *se caminaba pausada, pero firmemente*? ¿Cuáles son esos *elementos propios y característicos de dicha Iglesia*? ¡Ah! no: en España no se ha conocido nunca otra Iglesia que la fundada por el Apóstol Santiago y los esclarecidos Obispos enviados con este objeto por el mismo Príncipe de los Apóstoles. Ella ha formado siempre parte de la Iglesia universal. Jamás se la ha denominado con el impropio y sospechoso título de *Iglesia nacional*. La celeberrima Iglesia particular de España en la que brillaron los Leandros, los Fulgencios, los Isidoros, los Braulios, los Ildefonsos y otros mil preclaros varones, y á la que desde el tiempo mismo de su fundacion, inmortalizaron sus mártires y despues dieron gloria imperecedera sus Concilios, nunca ha desaparecido de nuestra querida pátria. Siempre se ha mantenido firmemente unida y en íntima comunicacion con la Iglesia universal, sin tener otros elementos propios y característicos, que la sumision al Romano Pontífice y la obediencia á sus legítimos Obispos. Esa Iglesia particular, de la cual son hijas predilectas las Órdenes Militares, se hallaba en la época á que se refiere la cláusula que voy examinando, con la vida y vigor necesarios para extender sus límites de un modo que parecería fabuloso si no lo atestiguase la historia, llevando la

luz del evangelio y propagando la fé católica en mundos antes desconocidos, vida y vigor de que pocos años despues dió una prueba elocuentísima por medio de sus ilustres Obispos, de sus profundos teólogos y sábios canonistas en el Concilio de Trento. Esa vida y ese vigor no los ha perdido por fortuna en los tiempos modernos, como tuvo ocasion de acreditarlo á la faz del mundo en el reciente Concilio del Vaticano, donde los Obispos españoles, que acompañados de sus teólogos y canonistas asistieron á él, supieron, con la sola excepcion del que suscribe, si no dar nuevo brillo, conservar al ménos las glorias adquiridas en el de Trento, habiendo cabido á uno de ellos, que con el mayor gusto le he visto preconizado por el Papa para la insigne Silla de Santiago de Compostela, la honra señalada de hacer terminar con su elocuente y persuasiva palabra el más empeñado é importante de los debates conciliares, y contribuir con su ciencia al triunfo más completo de la doctrina que respecto á la infalibilidad pontificia, habia sostenido y enseñado siempre esa Iglesia particular de España.

Mucho más pudiera añadir en refutacion de las aserciones erróneas que se hacen en el mencionado preámbulo; pero para no abusar de la benévola atencion de V. E., y habiendo rebatido ya algunas de ellas, y con especialidad las que se refieren al *pase* en mis comunicaciones al Sr. Ministro de Gracia y Justicia, me concretaré á manifestar que el decreto de 14 de Abril ha restablecido de un modo notoriamente anticanónico el llamado Tribunal especial de las Órdenes Militares, Tribunal que, en lo religioso, no tiene ni jurisdiccion, ni territorio donde pudiera ejercerla, y, por consiguiente, ni negocios de que conocer, ni súbditos á que mandar. Es un Tribunal que se ha establecido con notoria infraccion de las leyes eclesiásticas y contra la expresa voluntad del Papa, ora se atienda á lo dispuesto en la Bula *Dum intra*, ora á lo que, al derogarla, se ha

prevenido en la *Quo gravior*. Si se atiende á la primera, los ministros que lo componen han sido nombrados por quien no tiene facultad para hacerlo, pues solo la tenian, segun dicha Bula, como acabo de demostrar, los Reyes católicos en concepto de Grandes Maestres de las referidas Ordenes, dignidad en la que en manera alguna ha sucedido, ni puede suceder, como no sea por medio de concesion apostólica, el actual Gobierno. Y si se atiende á la segunda, ni aun esta concesion podrá obtener mientras no llegue el caso de erigirse canónicamente el nuevo Priorato de las Ordenes Militares; ó sea el territorio especial, ó coto redondo determinado en el Concordato. Entre tanto, el estado canónico y legal de este asunto es, el de hallarse extinguida de hecho y de derecho la jurisdiccion eclesiástica especial que anteriormente correspondia al Gran Maestre de las citadas Ordenes y el de encontrarse todos sus territorios legitimamente incorporados á las diócesis respectivas y dependientes de la jurisdiccion ordinaria de sus Obispos, puesto que, dígase lo que se quiera en el preámbulo tantas veces citado, no solo está ejecutada la Bula *Quo gravior* en España, sino además remitidas á Su Santidad las copias autorizadas de los autos de ejecucion dictados por mí en los expedientes canónicos que al efecto se han instruido en cada una de las diócesis en que existian, ó á las que, segun las disposiciones de esta Bula, habia que agregar los territorios de las mencionadas Ordenes.

Ese tribunal, por consecuencia, no es canónico. Carece de toda autoridad. Las disposiciones que adopte en asuntos eclesiásticos ó religiosos, serán nulas, de ningun valor ni efecto, y tanto los que las dicten, como los que las obedezcan incurrirán irremisiblemente en las graves penas canónicas señaladas por derecho y en los términos que el mismo previene. Privado de la comunión con la Santa Sede ese tribunal acéfalo, no puede

ser tenido por católico; habrá que considerarlo como intruso, y los Obispos á quienes no es lícito desprenderse de la jurisdicción ordinaria que tienen en los nuevos territorios que se han agregado á sus respectivas diócesis, se verán precisados á cada paso á levantar su voz y hacer uso de su autoridad divina en defensa de estas nuevas porciones de su rebaño, porque cualquiera que sea la aflictiva situación en que los coloque el citado decreto y las medidas que se adopten para llevarlo á efecto, todos cumplirán con su deber; todos se opondrán á los mandatos de ese tribunal, arrostrando sin temor toda clase de responsabilidad, menos la terrible que contraerian por no defender á sus ovejas en el trance supremo de querer ser arrebatadas por una autoridad ilegítima rebelada contra el Papa.

No serán tampoco los nobles é ilustres Caballeros y respetables Freires que componen las cuatro Órdenes Militares, los que presten obediencia y sumisión á dicho tribunal. Entusiasmados todos de sus pasadas glorias adquiridas en defensa de la fé católica, ni como cruzados, ni como españoles, han de querer perderlas en un solo momento, por ponerse en una situación de verdadera rebeldía contra la Santa Sede. Ellos saben que en asuntos religiosos, cuando se trata de cosas espirituales, no hay medio para los católicos, ó con el Papa, ó contra el Papa, y que en esta alternativa no les queda mas recurso que el de continuar al lado de la Iglesia Católica, obedeciendo la Bula *Quo gravius*, ó pasarse al opuesto, en que se ha colocado el referido tribunal por solo el hecho de haberse instalado para lo religioso sin otra autorizacion que la del decreto de 14 del corriente, que lo reduce á la triste condicion de jefe y cabeza de cismáticos.

Cortísimo es hasta ahora el número de los que, al ejecutarse la Bula *Quo gravius* se han resistido á cumplimentar sus

disposiciones. Desgraciadamente la mayor parte de este corto número la componen eclesiásticos, que separándose en mala hora y por motivos que ellos sabrán, de los dignísimos que forman casi la totalidad del respetable Clero de las Ordenes, y no imitando el noble ejemplo que les han dado muchos de los mas distinguidos dignatarios del mismo con su espontánea obediencia y sumision á lo mandado por el Pontífice, han sido en algun punto á causa de su hostilidad manifiesta ó de sus insidiosas maquinaciones, la piedra de escándalo para los buenos.

Los pueblos, no obstante, han aceptado con júbilo y obedecido con respeto el mandato apostólico, sin que haya sido suficiente para desviarlos de este camino la presion que en sus ánimos han procurado ejercer los funcionarios públicos en ciertas localidades por cumplir lo que en obsequio de los expresados eclesiásticos rebeldes les habia prevenido el Gobierno.

Lo propio ha de suceder en lo sucesivo. El catolicismo se encuentra muy arraigado en el pueblo español; y si por medios violentos se quisiera obligar á los fieles á separarse de los preceptos y enseñanzas del mismo, y se intentara compelerles á que, en un asunto tan grave y delicado como el de la jurisdiccion eclesiástica, que afecta hasta la validez de los sacramentos de la penitencia y del matrimonio desobedecieran al Papa se verian con frecuencia en los pueblos escenas parecidas á la que no ha muchos dias tuvo lugar en un Convento de Monjas que habian estado sujetas á la extinguida jurisdiccion especial de las Ordenes.

Llamadas al locutorio y reconvenidas bruscamente las ejemplares Religiosas por una autoridad local á consecuencia de haber reconocido como legítimo Prelado al R. Obispo de la diócesis en virtud de lo dispuesto en la Bula *Quo gravius*, y habiéndolas amenazado de una manera muy poco delicada con

privarles de la Misa, de su dotacion y hasta con expulsarlas del Convento si inmediatamente no volvian á someterse á la indicada jurisdiccion suprimida, le dieron á una voz esta hermosa respuesta: *que hiciera lo que quisiese, que estaban dispuestas todas á todo; que si era preciso irian con mucho gusto al suplicio á recibir la corona del martirio antes que desobedecer á Su Santidad.*

La reproduccion de escenas de esta clase podria ser causa de males sin cuento que V. E., en su justificacion y patriotismo, se complacerá en evitar. A esos elevados sentimientos apelo yo por conclusion de este escrito, seguro de que mi reclamacion ha de obtener el éxito favorable que deseo. Dios guarde á V. E. muchos años. Valladolid 30 de Abril de 1874.—Juan Ignacio, Cardenal Moreno, Arzobispo de Valladolid.—Excmo. Sr. Presidente del Poder Ejecutivo de la República. »

EL CISMA DE CUBA.

Segun han últimamente anunciado los periódicos, el desgraciado D. Pedro Llorente y algunos de sus infelices secuaces llegaron hace poco á la Península. ¡Ojalá sea de paso para Roma, á fin de ir allí á postrarse á los pies del Santo Padre y obtener la absolucion de las censuras en las cuales han incurrido! Sabemos tambien que los esforzados defensores de los derechos de la Iglesia en Cuba D. José Orberá, legítimo Vicario Capitular de aquel Arzobispado, y su Secretario D. Ciriaco Sancha han sido puestos en libertad. Estos acontecimientos hacen esperar, que haya felizmente terminado el Cisma que por mas de un año ha afligido á aquella archidiócesis.

SALAMANCA: IMP. DE OLIVA.